



Memoria seminario:
Desafíos de la Transición Justa en el Norte de Chile
entre la justicia y las *zonas de sacrificio*

Auditorio Biblioteca Campus Coloso - Universidad de Antofagasta



HEINRICH
BÖLL
STIFTUNG
SANTIAGO
DE CHILE

UA
Universidad
de Antofagasta



Memoria seminario: “Desafíos de la Transición Justa en el Norte de Chile entre la justicia y las zonas de sacrificio”

Organizado por Fundación Tantí, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Chile y la Universidad de Antofagasta

Autor:

Felipe Fontecilla Gutiérrez

Sistematización Seminario:

Estefanía Triviño Soto

Revisión y edición:

Gabriela Cabaña, Ramón Balcázar M.

Diseño:

Bárbara Astudillo

Agradecimientos:

El seminario "Desafíos de la Transición Energética Justa para el Norte de Chile" fue posible gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll, la Universidad de Antofagasta y el equipo de Fundación Tantí. Agradecemos a las panelistas Gabriela Garrido, Pamela Poo, Alejandra Donoso, Robinson Galleguillos, Katta Alonso, Marcelo Silva y Julio Ramos, así como a las comunidades indígenas y asistentes por su participación y reflexiones. El taller participativo y el seminario realizados en el marco de esta iniciativa fortalecen las redes de intercambio de saberes y de solidaridad para la justicia socioambiental y climática.



Índice:

Resumen ejecutivo	04
<hr/>	
Introducción: Desafíos de la Transición Justa en el Norte de Chile	06
<hr/>	
Presentación I: Hidrógeno Verde: ¿Transición Energética Justa o Nuevas Zonas de Sacrificio en el Norte de Chile?	10
<hr/>	
Panel I: Impactos Socioecológicos de la Transición Energética.	14
• Intervenciones de la Audiencia	23
<hr/>	
Presentación II: Comunidad de Chiu-Chiu y los Desafíos del Alto Loa	25
<hr/>	
Panel II: Experiencias Comunitarias y Participación Ciudadana, Presentación de experiencias de participación comunitaria y sus desafíos en proyectos vinculados a la transición energética.	29
• Conclusiones y reflexiones colectivas	35
<hr/>	
Comentarios finales.	37



Resumen Ejecutivo



Resumen Ejecutivo:

El seminario "**Desafíos de la Transición Justa en el Norte de Chile**", realizado el 23 de octubre de 2024 en el Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta, fue organizado por la **Fundación Tantí** con el apoyo de la **Fundación Heinrich Böll Stiftung** y la **Universidad de Antofagasta**. Este encuentro reunió a representantes comunitarios, especialistas en medio ambiente, académicos y otros actores clave para dialogar sobre los **impactos socioambientales de las políticas de transición energética** implementadas en el norte de Chile.

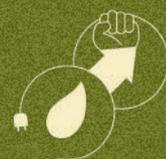
Las exposiciones y mesas de discusión analizaron cómo las políticas energéticas actuales se alinean –o no– con los principios de **justicia climática y transición justa**, planteando si estas iniciativas realmente benefician a las comunidades locales o perpetúan las denominadas "**zonas de sacrificio**".

Uno de los principales focos de discusión fue la **industria emergente del hidrógeno verde**, presentada como un pilar clave en la estrategia de descarbonización del país. Sin embargo, los participantes alertaron sobre los riesgos asociados a su implementación, subrayando que su producción implica **un alto consumo de agua y energía**, lo que genera conflictos en territorios con grave estrés hídrico y ecosistemas frágiles. Se cuestionó la narrativa de "**energía limpia**", evidenciando que el modelo de producción masiva, enfocado en la exportación hacia Europa, favorece a grandes corporaciones transnacionales mientras que las comunidades locales enfrentan las externalidades negativas, como la contaminación, el desplazamiento forzado y la pérdida de derechos territoriales.

Se denunció la falta de mecanismos efectivos de **consulta previa, libre e informada**, en incumplimiento del **Convenio 169 de la OIT**, lo que refuerza la exclusión de los pueblos indígenas de los procesos de toma de decisiones.

Un tema transversal en el debate fue la necesidad de una **revisión crítica del concepto de "transición justa"**, ya que, según los panelistas, ha sido utilizado como un discurso superficial que no enfrenta las **injusticias estructurales** del actual modelo de desarrollo. Se enfatizó la importancia de diseñar políticas energéticas en conjunto con las comunidades locales, respetando sus conocimientos ancestrales y su derecho a la autodeterminación territorial. Se hizo un llamado a **promover modelos descentralizados de generación energética** que prioricen el bienestar social y ecológico por sobre el lucro de las empresas.

Como conclusión, se destacó que una verdadera transición energética justa debe **romper con las lógicas extractivistas**, colocando en el centro a las comunidades históricamente afectadas. Se planteó la necesidad de un cambio estructural que no solo se enfoque en la transformación tecnológica, sino que integre criterios de **equidad social, sostenibilidad ecológica y participación efectiva**. Solo así se podrá garantizar que la transición energética sea una oportunidad para visibilizar y reparar las **injusticias históricas que afectan a los territorios andinos y costeros del norte de Chile**.



Introducción:

Desafíos de la Transición Justa en el Norte de Chile.

Ramón Balcázar
Director Ejecutivo
Fundación Tantí



Introducción:

Desafíos de la Transición Justa en el Norte de Chile.



Ramón Morales Balcázar
Director Ejecutivo, Fundación Tantí

Activista e investigador. Candidato a Doctor en Desarrollo Rural con experiencia en las implicancias socioterritoriales de la expansión de la minería de litio en la Puna de Atacama. Es miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos OPSAL, y Director Ejecutivo de Fundación Tantí

En este seminario, nos hemos reunido para explorar y reflexionar sobre un tema de vital importancia: la relación entre la implementación de políticas globales de transición energética y la profundización del extractivismo histórico en el norte de Chile. Con una mirada situada a la vez en los territorios y la academia, pero también en lo local y lo global, nos preguntamos en qué medida las estrategias de transición energética propuestas desde los gobiernos para enfrentar el cambio climático permite pensar nuevos horizontes de justicia y bienestar para los pueblos y comunidades o si, a la luz de la implementación progresiva de las estrategias nacionales del litio y del hidrógeno verde, nos encontramos frente a la emergencia de zonas de sacrificio verdes.

Hoy, nos encontramos en un momento crucial marcado por eventos climáticos extremos y una agenda climática que de acuerdo al último informe del IPCC no podrá evitar un aumento sobre 1,5 grados respecto a niveles preindustriales en las próximas décadas. Lejos de proponer cambios sistémicos, el crecimiento económico de las grandes potencias globales trae consigo la expansión de industrias como la minería de litio y el hidrógeno verde junto a promesas de oportunidades económicas, pero también dudas sobre los riesgos existentes y potenciales para países como Chile. Mientras a países del sur global como Chile se les exige abrir sus fronteras a las cadenas de valor de las industrias verdes, las grandes potencias contaminantes continúan subsidiando los combustibles fósiles y las industria de armas que serán utilizadas para cometer genocidios como lo que vemos con dolor hoy en Palestina. Estos desafíos profundos y complejos no pueden ser abordados sin un diálogo de saberes y una democratización de los procesos de toma de decisiones que aseguren la participación vinculante y la autodeterminación de los pueblos. En un país que se enorgullece de su riqueza natural y cultural, nos enfrentamos a la dura realidad de que esta riqueza carece de un resguardo institucional robusto y contrasta drásticamente con las injusticias socioambientales y la degradación continua de ecosistemas andinos y costeros.

Las zonas de sacrificio que han surgido como resultado de esta expansión industrial, son un claro reflejo de las tensiones entre el desarrollo económico y la justicia ambiental. Estas áreas, donde la explotación de recursos se lleva a cabo sin considerar adecuadamente el bienestar de las personas y el entorno, nos invitan a cuestionar los modelos de desarrollo que hemos adoptado. ¿Estamos realmente avanzando hacia un futuro más "verde" y una economía menos contaminante? ¿Cuáles son los sistemas de conocimiento y proyectos de vida que están ausentes en los debates públicos y en los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel nacional como internacional? Y por último, ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta transición?

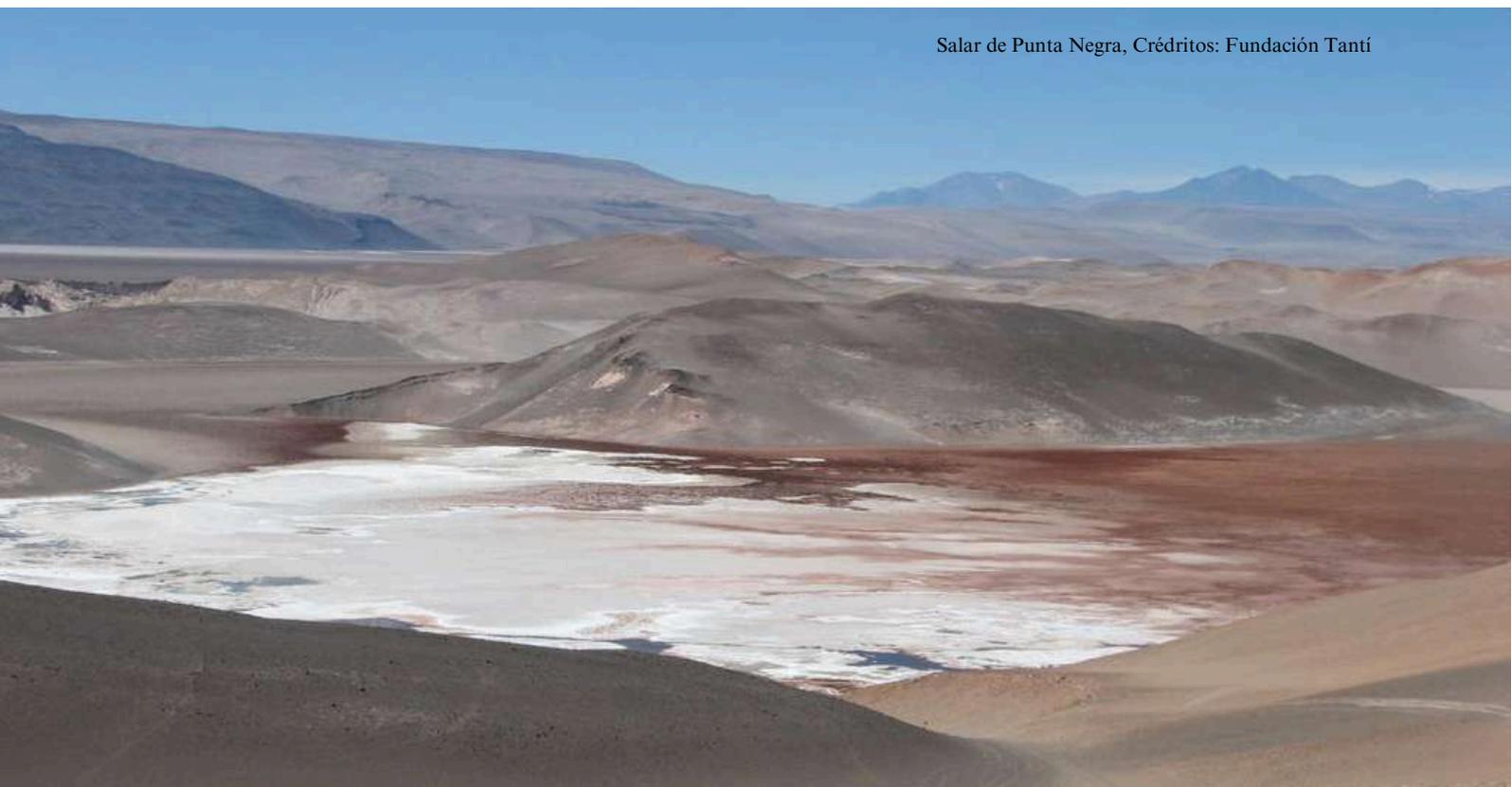
Desde FT proponemos abordar estas preguntas a través de la investigación acción, es decir con una mirada puesta en las problemáticas y propuestas que plantean las propias comunidades y organizaciones territoriales. En la medida de lo posible, también apuntamos a que esta investigación sea participativa, es decir que las preguntas de investigación y el desarrollo de la misma sea realizado por las propias comunidades y movimientos que viven en carne propia los impactos invisibilizados del modelo de desarrollo extractivista. De hecho, ellos y ellas son las primeras en investigar y encender la alerta cuando se presenta una amenaza en su territorio. Desde esta misma perspectiva, creemos que las propuestas de transición socio ecológica también deben pensarse con quienes más conocen y más perciben el cambio ambiental. Es por ello que a lo largo de este seminario, contamos con la participación de destacados defensores ambientales, especialistas e investigadores que compartieron sus perspectivas desde una mirada situada en los territorios donde se manifiestan las contradicciones de un modelo en crisis. Juntos y juntas, exploramos las implicaciones sociales, económicas y ambientales del extractivismo, así como las luchas y resistencias que emergen desde las comunidades afectadas por la acelerada expansión o llegada de nuevos proyectos mineros y energéticos que buscan satisfacer una demanda creciente de dimensiones nunca antes vistas en la historia de la humanidad.

Protesta en Salar de Atacama. Créditos: Ramón Balcázar M.



En este sentido nos preguntamos, ¿qué tan justa es una transición que sacrifica nuestros territorios y ecosistemas para la demanda incesante de grandes potencias globales y corporaciones, las verdaderas responsables de la crisis planetaria? ¿Las regalías y royalties que dejan estas industrias serán suficientes para compensar los daños irreparables que estas empresas dejan a su paso? Con ejemplos tan elocuentes como el **Salar de Punta Negra, Atacama y Talabres, así como la Bahía de Mejillones y Tocopilla**, la Región de Antofagasta es un territorio cuyos habitantes no sólo merecen ser debidamente informados y consultados frente a estos proyectos que amenazan con perpetuar el sacrificio socioambiental. Desde la Puna de Atacama a las costas, ellos y ellas persisten junto a conocimientos que son el resultado de una presencia milenaria que debemos valorar y escuchar para imaginar nuevos equilibrios en un mundo en constante cambio.

Salar de Punta Negra, Créditos: Fundación Tantí





Presentación I:

Hidrógeno verde:
¿Transición Energética justa o nuevas zonas de
sacrificio en el Norte de Chile?

Gabriela Cabaña
Investigadora
Fundación Tantí



Hidrógeno Verde:

¿Transición Energética justa o nuevas zonas de sacrificio en el Norte de Chile?



Gabriela Cabaña
Investigadora, Fundación Tantí

Socióloga y doctora en antropología, con experiencia en el estudio de conflictos e impactos del desarrollo de infraestructura energética en Chiloé y Antofagasta. Investigadora de Fundación Tantí.

La presentación de Gabriela Cabaña en el seminario abordó en detalle la relación entre la expansión de las energías renovables no convencionales, la minería y el hidrógeno verde en la región de Antofagasta, en el marco de una transición energética que se plantea como urgente y necesaria. A partir de una perspectiva de justicia ambiental y con un enfoque de investigación-acción, el estudio realizado por Fundación Tantí tuvo como objetivo analizar los impactos emergentes de esta transición y anticiparse a los desafíos socioambientales que podrían surgir. Cabaña enfatizó la importancia de no repetir errores del pasado: “Lo que quisimos observar, dada la experiencia previa de Fundación Tantí en la región, era ver cuáles están siendo los impactos emergentes de esta transición energética y poder vislumbrar también, anticiparnos a impactos de una industria que está teniendo cada vez más empuje, como el hidrógeno verde, y que no nos pase lo que siempre nos pasa, que llegamos tarde.”

La ponencia contextualizó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde (ENH2V), lanzada en 2020 en un escenario de recuperación post-pandemia y promocionada como una oportunidad para reconfigurar el perfil productivo del país, similar a la minería. Se destacó que el principal socio comercial de este desarrollo es Europa, con un fuerte impulso del gobierno a través de la asignación de terrenos fiscales y otros mecanismos de promoción financiera. Sin embargo, Cabaña alertó que la estrategia se diseñó entre un grupo reducido de expertos sin consulta ciudadana ni participación de las comunidades afectadas. “No respondió a una necesidad que existía a nivel territorial de producir hidrógeno verde,” señaló. A pesar de la creación de un Plan de Acción en 2023-2024 para abordar las deficiencias en la participación ciudadana, Cabaña destacó que persistieron problemas estructurales, como la ausencia de una evaluación ambiental estratégica y de consulta indígena previa.

La presentación hizo un análisis crítico del concepto de “hidrógeno verde”, cuestionando la denominación y advirtiendo que este término esconde los impactos ambientales asociados a su producción. La producción de hidrógeno por electrólisis requiere grandes volúmenes de agua de alta pureza: “La proporción es de 35 litros de agua destilada de alta pureza por cada

kilo de hidrógeno producido,” indicó la presentadora, evidenciando la presión que este tipo de proyectos ejercen en una región con estrés hídrico crítico. A esto se suma la infraestructura energética necesaria, como complejos eólicos, paneles solares, líneas de transmisión, puertos y cañerías, que afectan gravemente los ecosistemas locales y el patrimonio arqueológico. “No se trata solo de paneles solares, sino de una red compleja de infraestructura que transforma el territorio” explicó.

En términos de la realidad actual de la industria en Antofagasta, se identificaron 30 proyectos de hidrógeno verde y derivados como el amoníaco verde en distintas fases de avance. Según Cabaña, la minería se posiciona como “el socio estratégico” de esta industria, consolidando la relación entre el modelo extractivista y la nueva economía verde. Los principales proyectos analizados fueron:

- **Proyecto Hoasis:** Se trata del proyecto de mayor envergadura, con una capacidad de 6 GW de infraestructura energética asociada. Está diseñado para abastecer la demanda minera y, en una segunda fase, exportar a mercados internacionales. “Este proyecto ejemplifica la magnitud de las intervenciones territoriales que se proyectan en la región” destacó.
- **Proyecto Volta en Mejillones:** Actualmente en evaluación ambiental, consiste en una planta de hidrógeno con un parque fotovoltaico asociado. La infraestructura planificada se superpone con hábitats críticos de especies como el gaviotín chico y la gaviota garuma. “Este es un territorio altamente industrializado y las comunidades ya enfrentan graves impactos acumulativos,” señaló Cabaña, añadiendo que el proyecto aumentará la presión sobre la biodiversidad local.
- **Nodo fotovoltaico en Peine:** En esta zona se están implementando múltiples proyectos fotovoltaicos y líneas de transmisión que afectan cuencas protegidas, particularmente el salar de Imilac. Las líneas de transmisión atraviesan directamente áreas de vegas y bofedales. El salar de Imilac está conectado con el Salar de Punta Negra, históricamente afectado por la extracción de agua para minería de cobre.
- **Planta de hidrógeno verde en Calama:** Este proyecto, según su Declaración de Impacto Ambiental, planea utilizar aguas residuales tratadas que actualmente se devuelven al río Loa, una medida que podría agravar aún más la crisis hídrica en la zona.

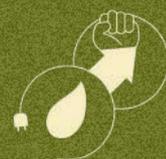
Se enfatizó que la industria del hidrógeno verde no se limita solo a la producción de energía, sino que genera impactos acumulativos a través de la infraestructura asociada, como las desaladoras. Se destacó que Chile no cuenta aún con regulaciones adecuadas para la gestión de residuos de estos proyectos, ni para la protección de la biodiversidad marina afectada por la descarga de salmuera. Cabaña resaltó que “los impactos sinérgicos de la desalación son una gran preocupación para las comunidades costeras, quienes ya enfrentan la sobreexplotación del recurso marino.”

Un punto clave de la exposición fue la falta de transparencia y acceso a la información por parte de las comunidades locales, que se enteran de los proyectos cuando estos ya están en etapas avanzadas de planificación. Esto se traduce en que las instancias de participación no le dan a quienes habitan los territorios ninguna incidencia real. Cabaña subrayó que los proyectos se están implementando sin respetar el Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa, libre e informada.

La exposición concluyó con un llamado a cuestionar el modelo de transición energética promovido por el gobierno, el cual continúa priorizando el crecimiento económico sobre los derechos territoriales y ambientales de las comunidades. Se advirtió que este modelo perpetúa un extractivismo “verde” que sigue demandando más agua, más tierra y más energía, consolidando nuevas zonas de sacrificio bajo un discurso de sostenibilidad. “No se trata solo de cambiar la fuente de energía, sino de cuestionar el modelo de desarrollo que perpetúa desigualdades,” afirmó Cabaña.

La investigación de Fundación Tantí evidenció la urgencia de generar una transición energética que realmente considere la justicia socioambiental, priorizando el bienestar de las comunidades locales y la protección de los ecosistemas frente a la presión extractivista. “Es fundamental un cambio de paradigma que integre la autodeterminación de los pueblos y la participación efectiva en la toma de decisiones,” concluyó Cabaña, subrayando la importancia de continuar articulando estrategias de resistencia y visibilización de los impactos en los territorios afectados.





Panel I:

Impactos Socioecológicos de la Transición Energética

**Gabriela Cabaña
Pamela Poo
Alejandra Donoso
Gabriela Garrido**

**Fundación Tantí
Fundación Ecosur
Defensoría Ambiental
Panel Ciudadano de
H2 de Magallanes**



Impactos Socioecológicos de la Transición Energética.



Gabriela Cabaña
Investigadora, Fundación Tanti

Socióloga, diplomada en ecología social y ecología política, y doctora en antropología. Su tesis doctoral se enfocó en el estudio de conflictos e impactos del desarrollo de infraestructura energética en Chiloé. Otras investigaciones se han centrado en la promoción del hidrógeno verde en Chile. Investigadora de la Fundación Tanti.



Pamela Poo
Directora, Fundación Ecosur

Politóloga y Administradora Pública de la Universidad de Concepción y Magíster en Sociología de la Universidad Arcis. Activista, difusora, e investigadora en áreas como el cambio climático, el agua, los residuos, la energía y el análisis de modelos productivos vinculados a la minería. Actualmente se desempeña como directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur, y como vicepresidenta de ACCION Consumidores.



Gabriela Garrido
Panel Ciudadano de Hidrógeno Verde

Licenciada en Biología Marina de la Universidad Austral de Chile. Desde el año 2014, se desempeña como coordinadora del centro, velando por la correcta operación del mismo en todas sus líneas de acción. Además, contribuye en la creación y postulación de proyectos a fondos regionales, nacionales e internacionales con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de conservación establecidos por el Plan de Manejo del sitio Ramsar Bahía Lomas.



Alejandra Donoso
Abogada, Universidad de Chile.

Máster en DDHH, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá, Diplomada en Estudios Socioambientales por la Universidad de Chile, y en Ecología Social y Política por la Universidad de Santiago, ha dedicado su carrera profesional a la defensa de la naturaleza y de las comunidades afectadas por la injusticia ambiental.

El primer panel del seminario abordó los impactos socioecológicos de la transición energética, reuniendo a destacadas expositoras con una amplia trayectoria en la defensa ambiental y la investigación territorial. La conversación se centró en analizar cómo la expansión de la industria del hidrógeno verde y las energías renovables en el norte de Chile están afectando los ecosistemas locales, los recursos naturales y las comunidades, cuestionando la narrativa oficial de la transición como un proceso inevitable y beneficioso para todos.

La discusión comenzó con Gabriela Cabaña, quien presentó los principales hallazgos de su investigación sobre los efectos de la industria del hidrógeno verde y la minería en la región de Antofagasta. A partir de estos resultados, se dio paso a una conversación en profundidad, en la que participaron Pamela Poo, Gabriela Garrido y Alejandra Donoso, quienes aportaron sus conocimientos desde distintas perspectivas.

La primera ronda de intervenciones se basó en las preguntas: *Cuando nos referimos a la transición justa, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Cuáles son las amenazas que ustedes han visto del proceso de transición?*

Alejandra Donoso inició su intervención destacando la importancia del encuentro para generar un diálogo necesario sobre los desafíos que enfrenta la transición energética en Chile. Desde su perspectiva como abogada de la **Defensoría Ambiental**, enfatizó que uno de los principales problemas en el debate sobre la transición energética es la falta de un **enfoque ecosistémico**, el cual considera fundamental para abordar de manera integral la interdependencia entre el ser humano y el entorno. Según Donoso, esta mirada sistémica es frecuentemente ignorada en los procesos de toma de decisiones, donde las políticas públicas y las estrategias de desarrollo energético tienden a fragmentar la realidad, reduciendo los impactos a indicadores cuantificables sin considerar las complejas interrelaciones entre los elementos naturales y sociales.

Donoso hizo referencia al **concepto de límites planetarios**, desarrollado por Johan Rockström y otros científicos, el cual identifica nueve umbrales críticos que no deben ser sobrepasados para garantizar la sostenibilidad del planeta. Explicó que actualmente varios de estos límites han sido traspasados, en especial el **ciclo del agua**, lo que representa una amenaza directa para los ecosistemas y las comunidades que dependen de este recurso. Argumentó que la crisis hídrica en Chile es un reflejo de la desregulación y el sobreuso de los recursos naturales, donde la respuesta política ha sido promover la desalación sin considerar las implicancias ambientales y sociales de esta práctica. Subrayó que la **desalación no es una solución real**, ya que implica costos ecológicos elevados, como la alteración de los ecosistemas marinos y la concentración de poder en manos de grandes corporaciones que gestionan el agua como un bien de mercado.

En relación con la transición energética, Donoso cuestionó la narrativa de las **energías renovables como soluciones sostenibles**, argumentando que el discurso de la sostenibilidad ha sido cooptado por intereses empresariales que perpetúan el modelo extractivista bajo una nueva fachada "verde". Expresó su preocupación por la proliferación de **complejos energéticos**, en particular los denominados "parques eólicos", señalando que la terminología utilizada genera una percepción errónea en la opinión pública. Para Donoso, es fundamental hablar de "**complejos industriales**" en lugar de **parques eólicos**, ya que estos proyectos traen consigo una infraestructura masiva que fragmenta los ecosistemas y transforma radicalmente los paisajes y las dinámicas territoriales. Enfatizó que el lenguaje no es neutral y que debe ser utilizado con precisión para reflejar la verdadera naturaleza de estos proyectos.

Otro punto clave de su exposición fue la crítica al uso del término "**zonas de sacrificio**", concepto que ha sido adoptado por los movimientos socioambientales, pero que, según Donoso, debe manejarse con cautela. Argumentó que esta noción, aunque visibiliza las injusticias ambientales, no es un concepto jurídico y su uso puede invisibilizar la complejidad de las realidades territoriales. Advirtió que es necesario respetar la **autodefinición de las comunidades**, ya que muchas de ellas prefieren no reconocerse como zonas de sacrificio, sino como territorios de resistencia. Señaló que los tres elementos fundamentales que definen una zona de sacrificio son el **abandono del Estado**, la **proliferación de industrias contaminantes** y la **vulneración sistemática de derechos humanos**, los cuales deben ser analizados con detenimiento para evitar simplificaciones.

En cuanto a la política pública, Donoso planteó que el Estado ha jugado un rol pasivo frente a las demandas de las comunidades, actuando más como un facilitador de intereses corporativos que como un garante de derechos. Subrayó que la **ausencia de procesos de consulta previa, libre e informada** es una de las principales vulneraciones que enfrentan los pueblos indígenas y comunidades locales, contraviniendo el Convenio 169 de la OIT y otras normativas internacionales de derechos humanos. Destacó que en la mayoría de los casos, las comunidades sólo son informadas de los proyectos una vez que estos han sido aprobados, eliminando cualquier posibilidad real de participación.

Además, Donoso hizo hincapié en la importancia de fortalecer la resistencia territorial a través de la organización comunitaria, la articulación con la academia y el uso de herramientas legales para defender los derechos de los territorios. Subrayó que, aunque los desafíos son enormes, existe un aprendizaje acumulado en las comunidades afectadas por décadas de extractivismo, lo que les ha permitido desarrollar estrategias de defensa más efectivas. Llamó a las organizaciones a articularse mejor y a construir un discurso unificado que permita disputar el relato oficial de la transición energética como una solución única e incuestionable.

Para concluir, Alejandra Donoso destacó que la **transición energética justa solo será posible si se reconoce y respeta la autonomía de los territorios**, se garantizan derechos fundamentales como el acceso al agua y se impulsa un modelo de desarrollo que priorice el bienestar social y ecológico por sobre la rentabilidad económica. Recalcó que es necesario construir nuevas narrativas y dejar de validar acríticamente las propuestas que vienen desde el nivel central sin considerar la realidad de los territorios.

Terminada la palabra de Alejandr Donoso, Pamela Poo inició su intervención destacando la necesidad de analizar la transición energética desde una perspectiva crítica y estructural, cuestionando las narrativas predominantes que la presentan como una solución incuestionable para la crisis climática. Desde su experiencia como politóloga y especialista en políticas públicas, Poo enfatizó que la transición energética, tal como se está implementando en Chile y a nivel global, no es justa ni sustentable, sino que responde a una **crisis estructural del capitalismo**, la cual se ha disfrazado bajo conceptos como la "carbono neutralidad" y el "desarrollo sostenible". Según Poo, el sistema capitalista se encuentra en una crisis de acumulación, y la transición energética ha surgido como una estrategia para reinventarlo y prolongar su ciclo de explotación de recursos.

Explicó que el modelo actual de transición no es más que un **cambio tecnológico**, donde se busca sustituir fuentes de energía fósil por energías renovables sin cuestionar la estructura de consumo y crecimiento infinito sobre la que se basa el sistema económico. "No podemos hablar de una transición justa si seguimos manteniendo las mismas lógicas extractivistas y de acumulación de capital", afirmó Poo, insistiendo en que los proyectos de hidrógeno verde no han traído justicia ni beneficios reales para las comunidades. Advirtió que esta nueva economía "verde" es en realidad una **extensión del extractivismo**, que continúa perpetuando la desigualdad territorial, social y ambiental.



Uno de los puntos centrales de su exposición fue la crítica al rol del Estado, que ha actuado como facilitador de los intereses privados en lugar de proteger los derechos de las comunidades. Poo argumentó que el Estado chileno ha priorizado la atracción de inversiones extranjeras y la implementación de megaproyectos energéticos sin realizar evaluaciones estratégicas de impacto ambiental ni garantizar procesos participativos reales. "Estamos viendo cómo el gobierno se convierte en un mediador entre las empresas y las comunidades, en lugar de ser un garante de derechos", señaló, agregando que las comunidades sólo son consultadas cuando los proyectos están en etapas avanzadas y las decisiones ya han sido tomadas.

En relación con la **consulta previa, libre e informada**, Poo denunció que, en la práctica, este derecho es un trámite burocrático que no tiene incidencia real en los procesos de toma de decisiones. Explicó que la falta de participación efectiva ha generado un clima de desconfianza y resistencia en los territorios, donde las comunidades enfrentan una asimetría de poder con las empresas, las cuales cuentan con recursos legales y económicos para avanzar en sus proyectos. Subrayó que "las comunidades están luchando contra un sistema que les deja en total desventaja, sin acceso a la información técnica ni a los recursos legales para defender sus territorios".

Otro aspecto clave abordado en su intervención fue el impacto que la transición energética está teniendo en la vida cotidiana de las comunidades. Poo destacó que la crisis climática y ecológica se traduce directamente en **pobreza y pérdida de bienestar** para las personas que habitan en los territorios más afectados por el extractivismo. Explicó que, a medida que los recursos naturales se agotan, los precios de los bienes básicos aumentan, exacerbando la precarización de la vida en las comunidades. "La crisis climática es, en esencia, una crisis de acceso y distribución de recursos, y lo que estamos viendo es que las soluciones que se están implementando solo benefician a quienes pueden pagar por ellas", afirmó.

En su análisis, Poo también destacó la **criminalización de la protesta socioambiental**, señalando que quienes se oponen a los megaproyectos energéticos son etiquetados como "enemigos del desarrollo" o "antiprogreso". Explicó que los movimientos socioambientales han sido objeto de vigilancia y persecución por parte del Estado y las empresas, lo que dificulta la organización y resistencia comunitaria. Además, advirtió que los medios de comunicación dominantes han jugado un rol clave en la construcción de narrativas que deslegitiman las demandas de las comunidades afectadas.

Pamela Poo enfatizó la importancia de generar nuevas narrativas que disputen el discurso dominante sobre la transición energética. Sostuvo que es fundamental construir un **tejido social fuerte y colaborativo**, donde las comunidades puedan articularse para enfrentar los desafíos que presenta la implementación de estos proyectos. Argumentó que es necesario desarrollar procesos de autoorganización comunitaria, fortalecer las redes de apoyo mutuo y trabajar en la creación de alternativas locales sostenibles que no dependan de la lógica extractivista.

Entre sus propuestas, Poo destacó la necesidad de que las organizaciones socioambientales y la academia trabajen en conjunto para **fortalecer la incidencia política**, utilizando datos científicos y herramientas legales para frenar los proyectos que vulneran derechos territoriales. Afirmó que "no podemos seguir solo reaccionando frente a las amenazas; necesitamos construir estrategias de largo plazo que permitan una transición energética realmente justa".

Para cerrar su intervención, Poo hizo un llamado a la acción, instando a las comunidades a cuestionar el modelo de desarrollo actual y a exigir una transición que priorice el bienestar de las personas por sobre los intereses económicos. Subrayó que la resistencia comunitaria debe ir acompañada de un cambio cultural profundo, donde se promueva un **modelo de vida más austero y consciente**, basado en el decrecimiento y la reducción del consumo. "No podemos seguir validando un sistema que destruye nuestros territorios y precariza nuestras vidas; es momento de construir alternativas reales desde los territorios", concluyó.

Gabriela Garrido inició su intervención explicando la labor del **Panel Ciudadano sobre Hidrógeno Magallanes**, una instancia de articulación creada por diversas organizaciones de la sociedad civil para enfrentar la expansión de la industria del hidrógeno verde en la región. Subrayó la necesidad de que las comunidades tomen un rol activo en el proceso de toma de decisiones, dado que hasta la fecha la implementación de estos proyectos ha ocurrido **de espaldas a la ciudadanía**, sin instancias de participación efectivas ni consulta previa a las comunidades locales.

En su análisis, Garrido cuestionó la narrativa del gobierno y de las empresas, que presentan a Magallanes como una región clave para la producción de hidrógeno verde, con la promesa de desarrollo económico y generación de empleo. Sin embargo, enfatizó que las comunidades locales nunca fueron consultadas sobre su interés en transformar la región en un polo energético. "¿Quién le preguntó a la gente de Magallanes si quiere que su población aumente a 500 mil habitantes?", cuestionó, señalando la falta de planificación territorial y la imposición de un modelo de desarrollo externo que no considera las realidades locales ni los deseos de los habitantes.

Uno de los principales puntos abordados por Garrido fue la **falta de información y transparencia** respecto a los proyectos de hidrógeno verde en la región. Explicó que hasta la fecha existen al menos 16 proyectos en distintas etapas de desarrollo, sin que se haya socializado públicamente su alcance, impactos ni beneficios para la comunidad. Relató que fue a través de investigaciones independientes y del trabajo del panel que lograron obtener datos clave sobre la magnitud de estas iniciativas. "Nos enteramos por la prensa de estos proyectos, nadie nos ha informado oficialmente de lo que implica esta industria", afirmó, evidenciando la asimetría de información que existe entre las empresas, el gobierno y las comunidades.

Garrido también enfatizó el impacto ambiental de estos proyectos, explicando que la producción de hidrógeno verde requiere una **ocupación masiva del territorio**, con la instalación de complejos eólicos y fotovoltaicos que afectarán la biodiversidad y los ecosistemas locales. Mencionó que gran parte de estos proyectos están planificados en la **estepa patagónica**, un ecosistema que históricamente ha sido percibido como un espacio vacío, pero que en realidad alberga una biodiversidad única y cumple funciones ecológicas esenciales. Advirtió que la expansión de estas infraestructuras podría alterar el equilibrio natural y amenazar especies clave en la región.

Un aspecto central de su exposición fue la falta de una **visión territorial a largo plazo**, indicando que no existe una estrategia clara para la integración de esta industria en el desarrollo local de Magallanes. Explicó que la gobernanza del hidrógeno verde se encuentra actualmente en manos de instituciones de fomento productivo, lo que ha generado un sesgo a favor de los intereses económicos, dejando en segundo plano los impactos socioambientales. “La planificación territorial está ausente y los instrumentos de gestión no están considerando los desafíos que traerá esta industria”, señaló Garrido.

En términos sociales, Garrido destacó la preocupación de la comunidad por los efectos que la llegada masiva de trabajadores y la expansión industrial puedan tener en la cultura local y en la calidad de vida. Mencionó que Magallanes tiene una identidad fuertemente ligada a la naturaleza, con un estilo de vida que valora el entorno natural, y que la introducción de estos megaproyectos podría generar un quiebre en esta relación. “Nos quieren imponer un desarrollo que no es el que nosotros queremos ni el que necesitamos”, afirmó.

Otro de los desafíos expuestos por Garrido es la **dificultad de incidencia** en los procesos de evaluación ambiental. Relató que el panel ha trabajado arduamente para analizar los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas, pero que estos documentos son extensos y de difícil acceso para las comunidades. Explicó que su equipo ha desarrollado estrategias para **filtrar la información clave** y facilitar la participación ciudadana en los procesos, pero que aún enfrentan barreras significativas para lograr una incidencia real en la toma de decisiones.



Durante su intervención, Garrido también abordó la percepción errónea de la **carbono neutralidad** promovida por el gobierno, señalando que se ha vendido la idea de que Magallanes jugará un rol clave en la reducción de emisiones a nivel global, pero sin un análisis claro de los impactos locales. Cuestionó el hecho de que la región ya es considerada “carbono negativa”, es decir, que sus ecosistemas absorben más carbono del que emiten, y que la instalación de esta industria podría revertir esta condición.

Como propuesta, Garrido llamó a fortalecer la organización comunitaria y a articular estrategias de resistencia frente a los megaproyectos. Destacó que el Panel Ciudadano sobre Hidrógeno Magallanes ha logrado consolidarse como una voz crítica en la región, promoviendo la participación ciudadana y la exigencia de mayor transparencia por parte de las autoridades. Subrayó la importancia de compartir información clara y accesible, y de continuar con el monitoreo independiente de los proyectos en desarrollo.

Finalmente, cerró su intervención con un llamado a la acción, instando a las comunidades a defender su territorio y su forma de vida, resistiendo la imposición de un modelo de desarrollo que no responde a las necesidades locales. “No estamos en contra del desarrollo, pero queremos ser parte de la conversación y decidir qué tipo de futuro queremos para Magallanes”, concluyó.



Intervenciones de la Audiencia:

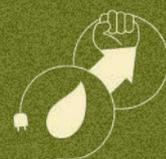
Durante la ronda de preguntas e intervenciones del público en el Panel I del seminario, se abordaron diversas preocupaciones y reflexiones sobre los impactos de la transición energética en los territorios del norte de Chile, destacando la ausencia del Estado, la falta de consulta ciudadana y los efectos en los ecosistemas marinos y la biodiversidad costera. Raúl Riquelme, representante del pueblo chango y pescador artesanal, compartió su experiencia sobre la degradación acelerada de los ecosistemas marinos en la Bahía de Mejillones, evidenciando el impacto negativo de las industrias extractivas, como las termoeléctricas y las plantas desaladoras, en los ciclos reproductivos de las especies marinas y en la seguridad alimentaria de las comunidades costeras. Mencionó la creciente contaminación del fondo marino y la amenaza que representa la alteración del pH del agua, lo que podría exacerbar aún más la crisis ecológica de la zona. Ante esto, se resaltó la importancia de integrar los conocimientos de los pescadores artesanales en la toma de decisiones y en los procesos de evaluación ambiental.

Andrea Vázquez Alfaro, de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra, analizó el desgaste del movimiento socioambiental tras el estallido social y el proceso constitucional fallido, señalando la necesidad de reconstruir alianzas y fortalecer redes de colaboración entre comunidades, organizaciones de la sociedad civil y la academia. Planteó la urgencia de desarrollar estrategias de articulación para enfrentar los megaproyectos extractivos desde una perspectiva colectiva, poniendo énfasis en la generación de propuestas de desarrollo sostenible que enfrenten la narrativa dominante de la transición energética.

Por su parte, Marcelo Silva, consejero regional del pueblo chango en Mejillones, denunció la ausencia total del Estado en las comunidades costeras, lo que ha permitido a las empresas energéticas posicionarse como actores centrales en los territorios, generando fragmentación social y dependencia económica. Expuso la falta de acceso a información clara y oportuna, lo que ha profundizado la desconfianza y la división en las comunidades. Además, criticó las dificultades burocráticas que enfrentan los pueblos originarios para ser reconocidos en los procesos de consulta y participación, lo que los deja en una posición de desventaja frente al avance de los proyectos energéticos.

Una de las consultas planteadas por el público estuvo relacionada con la necesidad de proteger elementos del patrimonio Chango, como conchales y momias, del avance de proyectos invasivos. Se destacó que estos elementos están protegidos por la legislación chilena y que su documentación y denuncia pueden ser herramientas clave para la defensa territorial. También se abordó la falta de transparencia de los proyectos de hidrógeno verde, señalando la dificultad de acceso a información georreferenciada y la necesidad de recurrir a mecanismos legales para obtener mayor claridad sobre los impactos y alcances de estos proyectos.

El cierre de la sesión estuvo marcado por la intervención de una dirigente comunitaria, quien enfatizó la importancia de continuar fortaleciendo el tejido social y organizativo para enfrentar los desafíos ambientales. Resaltó la necesidad de compartir experiencias y estrategias entre los territorios afectados, con el fin de generar una respuesta coordinada frente a la expansión de la industria energética y sus consecuencias en la vida de las comunidades.



Presentación II:

Comunidad de Chiu-Chiu y los Desafíos del Alto Loa

Robinson Galleguillos
Presidente
Comunidad Atacameña de Chiu-Chiu



**Robinson Galleguillos Morel**

Presidente de la Comunidad Atacameña San Francisco de Chiu-Chiu.

Firme defensor del medio ambiente y del patrimonio arqueológico. Como miembro del equipo “Machumanta Lantur” (el andar de los abuelos), se dedica a registrar y proteger antiguas rutas troperas y caravaneras ubicadas al oriente del río Loa, así como a documentar importantes sitios arqueológicos de Chiu-Chiu, preservando la Herencia y Memoria Ancestral de su Comunidad.

La exposición de Robinson Galleguillos, presidente de la comunidad atacameña de San Francisco de Chiu-Chiu, presentó un análisis exhaustivo sobre el impacto de la minería y las energías renovables en su territorio, destacando las problemáticas socioambientales que afectan a su comunidad y los esfuerzos que han realizado para preservar su patrimonio natural y cultural.

San Francisco de Chiu-Chiu es un poblado atacameño ubicado en la comuna de Calama, reconocido como zona típica por su valioso patrimonio histórico y cultural. La comunidad ha mantenido una fuerte conexión con su entorno natural, donde los ríos Loa y Salado juegan un papel fundamental en su sustento agrícola y ganadero. Lugares emblemáticos como la iglesia San Francisco de Asís, la más antigua de Chile, y la Laguna Inka Coya, reflejan la identidad cultural y espiritual del pueblo. Sin embargo, el avance de proyectos extractivistas ha puesto en peligro estos recursos, afectando la calidad de vida de los habitantes y generando tensiones sociales y ambientales.

Las costumbres y tradiciones de Chiu-Chiu han sido fundamentales para la cohesión comunitaria. Entre las prácticas más significativas se encuentra la limpia de canales, una actividad colectiva que garantiza el acceso al agua para riego y mantiene los vínculos comunitarios. Además, la comunidad ha desarrollado estrategias para la conservación de su patrimonio arqueológico, estableciendo alianzas con la Universidad de Chile para la documentación de sitios ancestrales y rutas caravaneras de importancia histórica. La colaboración con expertos ha permitido a la comunidad levantar evidencia científica para defender su territorio frente a los megaproyectos extractivos.

El impacto de la minería en el Alto Loa ha sido devastador. La sobreexplotación de los recursos hídricos por parte de la industria minera, especialmente Codelco, ha generado un deterioro irreversible en los ecosistemas locales. El desvío del río San Pedro para abastecer faenas mineras ha reducido drásticamente el caudal del río Loa, afectando a la agricultura, la fauna y las actividades tradicionales de la comunidad. Robinson relató cómo los bofedales

altoandinos, esenciales para la ganadería y la biodiversidad, han sido destruidos, obligando a familias enteras a abandonar sus actividades productivas y migrar hacia las ciudades. La comunidad de Toconce es un claro ejemplo de esta situación, donde la escasez hídrica ha transformado radicalmente su modo de vida.

Otro de los problemas críticos identificados es la contaminación por desechos mineros provenientes del salar de Talabre, convertido en tranque de relaves por Codelco. Con una extensión de miles de hectáreas se ha convertido en una de las principales fuentes de contaminación en la zona. Robinson explicó cómo el viento arrastra diariamente material tóxico desde el tranque hasta los poblados circundantes, afectando la salud de las personas y contaminando el agua y los suelos. Pese a los estudios científicos que han confirmado estos impactos, las evaluaciones ambientales presentadas por las empresas subestiman los riesgos, lo que motivó a la comunidad a interponer una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile por la falta de protección ambiental y la omisión de sus derechos.

En paralelo a la actividad minera, la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos ha traído nuevos desafíos para la comunidad. Si bien estas tecnologías son promovidas como soluciones sostenibles, en la práctica han generado impactos significativos en el territorio. Galleguillos destacó la falta de planificación en la instalación de estos proyectos, los cuales han destruido rutas caravaneras milenarias utilizadas por los pueblos atacameños para el comercio y la movilidad. Además, expresó su preocupación por los residuos tóxicos generados por estas infraestructuras a largo plazo, planteando el riesgo de que Antofagasta se convierta en un vertedero de componentes industriales obsoletos, tal como ha sucedido con la industria textil en la región.

En términos de patrimonio arqueológico, el dirigente denunció la destrucción de sitios ancestrales por parte de empresas de energía renovable que han ocultado información y presentado informes falsos para obtener permisos de operación. La comunidad, junto a otras organizaciones locales, presentó denuncias ante la Superintendencia de Medio Ambiente y el Consejo de Monumentos Nacionales, logrando la paralización temporal de algunos proyectos. Sin embargo, las empresas han retomado sus actividades, evidenciando la falta de fiscalización efectiva por parte de las autoridades.

Iglesia de San Francisco de Chiu-Chiu. Créditos: Robinson Galleguillos



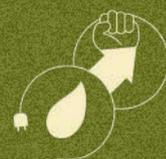


Laguna Inka Coya, Créditos: Robinson Galleguillos

La Laguna Inka Coya y los bofedales de Chiu-Chiu representan algunos de los últimos espacios naturales que la comunidad busca proteger. Galleguillos enfatizó la importancia de establecer medidas de conservación que garanticen la preservación de estos ecosistemas, alertando sobre el riesgo de que sean explotados por la industria minera en el futuro. En colaboración con la Fundación Tantí, están trabajando en estrategias para asegurar la protección de estos recursos mediante la implementación de normativas ambientales más estrictas.

En su reflexión final, Galleguillos subrayó la desconexión entre las promesas de desarrollo sostenible y la realidad que enfrenta la comunidad de Chiu-Chiu. Si bien las energías renovables se presentan como una solución al cambio climático, en su experiencia, estas tecnologías sólo han perpetuado el despojo territorial y la degradación ambiental. Cuestionó la legitimidad del concepto de transición justa cuando los costos sociales y ecológicos siguen recayendo en las comunidades locales, mientras que los beneficios económicos se concentran en las grandes corporaciones mineras y energéticas.

Galleguillos concluyó su intervención con un llamado a la acción, enfatizando la necesidad de que las comunidades sean parte activa en la toma de decisiones sobre proyectos energéticos y mineros, garantizando que se respeten sus derechos y se protejan sus territorios. "La paradoja es evidente: energía limpia para abastecer a la industria más contaminante del planeta" afirmó, reiterando la urgencia de una transición energética verdaderamente justa que priorice el bienestar de las comunidades y la protección del medio ambiente.



Panel II:

Experiencias Comunitarias y Participación Ciudadana, Presentación de experiencias de participación comunitaria y sus desafíos en proyectos vinculados a la transición energética.

Julio Ramos

**Agrupación Changos Recolectores
Pescadores Buzos Algueros
Mariscadores Camanchangos de Caleta
Cobija.**

Katta Alonso

**Mujeres en Zona de Sacrificio en
Resistencia**

Marcelo Silva

**Agrupación de Pescadores Artesanales
y Asociados de Hornitos**

Robinson Galleguillos

**Comunidad Atacameña de San
Francisco de Chiu-Chiu.**



Experiencias Comunitarias y Participación Ciudadana, Presentación de experiencias de participación comunitaria y sus desafíos en proyectos vinculados a la transición energética.

El segundo panel del seminario reunió a líderes y lideresas de distintos territorios afectados por la expansión de la industria energética y minera en Chile. La conversación estuvo marcada por los relatos de resistencia y lucha comunitaria, reflejando la profunda desconexión entre las políticas de transición energética impulsadas desde el nivel central y la realidad de los territorios. Los testimonios compartidos evidenciaron las múltiples vulneraciones que enfrentan las comunidades costeras y altoandinas en términos de acceso al agua, participación en la toma de decisiones y protección del patrimonio natural y cultural.

El panel abrió con un reconocimiento al esfuerzo de quienes han dedicado su vida a la defensa de sus territorios, destacando la importancia de compartir experiencias para fortalecer las redes de apoyo entre comunidades que enfrentan desafíos comunes. La moderación del espacio enfatizó la necesidad de construir un modelo de transición energética que respete los derechos humanos y ambientales, y que considere la participación vinculante de las comunidades afectadas.

El segundo panel se planteó en torno a las siguientes preguntas: ¿Cómo se ha percibido el desafío del cambio climático en sus territorios? ¿Y cuales son las necesidades que detectan en este contexto? incluyendo aquellas relacionadas con la transición energética. Se les pidió a los participantes también profundizar respecto a la presencia de termoeléctricas y su esperado proceso de cierre.

Como primera intervención, Katta Alonso, representante del movimiento **Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero-Puchuncaví**, expuso la grave crisis socioambiental que enfrenta su territorio, describiendo a su comunidad como una de las **zonas de sacrificio más emblemáticas de Chile**. En un radio de apenas ocho kilómetros de borde costero, se encuentran **18 industrias peligrosas y altamente contaminantes**, incluyendo cuatro termoeléctricas y la refinería de ENAP, así como otras empresas de almacenamiento de productos químicos como Copec y Oxiquim.





Alonso relató que los efectos del cambio climático en su territorio se ven agravados por esta concentración industrial, que ha contaminado el aire, los suelos, el fondo marino y las fuentes de agua dulce y salada. Enfatizó que los habitantes de la zona están expuestos a **niveles de contaminación extrema**, donde los niveles de metales pesados en los recursos marinos superan en cien veces la normativa nacional, afectando gravemente la salud de la población.

Respecto a la denominada “transición energética”, Alonso explicó que la comunidad de Quintero-Puchuncaví inicialmente recibió con esperanza el anuncio del cierre de la fundición de cobre de Codelco, decisión que consideraron una oportunidad para iniciar un proceso de recuperación ambiental. Sin embargo, lamentó que esta supuesta transición no ha sido ni justa ni participativa, ya que el cierre de la fundición fue anunciado **sin consulta previa a la comunidad**, generando incertidumbre y desconfianza. Destacó que la falta de diálogo y consulta con los habitantes perpetúa el ciclo de exclusión y vulneración de derechos en la zona.

A pesar del cierre de la fundición, Alonso denunció que **los proyectos contaminantes continúan expandiéndose**, señalando la reciente instalación de una **planta desaladora** que comenzó operando con una capacidad de mil litros por segundo, pero que ya ha solicitado ampliarse a tres mil litros por segundo. Aclaró que, si bien la empresa prometió proporcionar agua a la comunidad, esta no será potable debido a los costos asociados a su tratamiento. Subrayó que **el 80% de la población local carece de acceso a agua potable**, dependiendo de pozos contaminados con arsénico, plomo y cadmio, así como de camiones aljibe de dudosa procedencia.

En cuanto a los nuevos proyectos energéticos en la zona, Alonso informó sobre la **aprobación de cinco proyectos fotovoltaicos** de gran escala y la instalación de una planta de hidrógeno verde. Aseguró que, lejos de ser una solución, estos proyectos están **profundizando el modelo de sacrificio** en la zona, donde las comunidades siguen soportando los costos ambientales mientras las industrias privadas obtienen los beneficios.

Finalmente, expresó su preocupación por la falta de soluciones estructurales a la contaminación, señalando que los **picos de intoxicación por contaminantes** en la población siguen ocurriendo de manera recurrente, con **casi 400 niños intoxicados en lo que va del año**. Ante este panorama, Alonso enfatizó la necesidad de una transición energética realmente justa, que ponga en el centro la **salud y bienestar de las comunidades**, en lugar de priorizar los intereses económicos de las empresas.

Marcelo Silva, representante de la **Agrupación de Pescadores Artesanales y Asociados de Hornitos y Consejero Regional Chango**, expuso sobre la profunda crisis socioambiental que enfrenta su comunidad debido a la expansión de la industria energética y minera en la región de Mejillones. Comenzó señalando que la presencia de termoeléctricas ha generado **un grave deterioro del ecosistema marino**, afectando directamente a los pescadores artesanales que dependen del mar para su subsistencia.

Silva describió la situación de su comunidad como **una de total abandono por parte del Estado**, con **falta de acceso a servicios básicos** como agua potable y electricidad, a pesar de estar ubicados en una zona que se autodenomina “la capital de la energía” debido a la alta concentración de infraestructura energética en la zona. Criticó la paradoja de que mientras **la industria energética abastece al país, las comunidades locales no tienen siquiera servicios esenciales**, lo que evidencia una distribución desigual de los beneficios económicos generados por estas actividades.

Uno de los puntos más críticos abordados fue el impacto de las **plantas desaladoras**, cuya operación ha provocado **graves alteraciones en los ecosistemas marinos**, reduciendo la disponibilidad de especies pesqueras y poniendo en riesgo los medios de vida de las familias pescadoras. Explicó que las descargas de salmuera de estas plantas afectan la biodiversidad marina, alterando los ciclos reproductivos de especies clave y generando cambios irreversibles en el entorno.

En relación con los procesos de participación ciudadana, Silva denunció que estos han sido **meramente formales y no vinculantes**, donde las comunidades son informadas de los proyectos una vez que ya están en etapas avanzadas de planificación. Explicó que los espacios de consulta no son accesibles para los pescadores, debido a barreras tecnológicas y falta de apoyo por parte de las autoridades. Criticó la falta de transparencia y la incapacidad del sistema de evaluación ambiental para incorporar adecuadamente las preocupaciones y conocimientos locales.

Marcelo también resaltó la **división social** que generan estos proyectos en las comunidades costeras. Explicó que las grandes empresas utilizan tácticas de división, ofreciendo beneficios a ciertos grupos, lo que genera tensiones internas entre quienes aceptan las compensaciones y quienes resisten los proyectos. Esta estrategia, según Silva, ha debilitado la organización comunitaria, dificultando la resistencia conjunta frente a las amenazas ambientales.

Otro punto clave de su intervención fue la falta de **herramientas técnicas y legales** para enfrentar a las empresas. Silva enfatizó la importancia del apoyo de organizaciones como Fundación Tantí y otras ONGs, que han proporcionado asesoría y acompañamiento en la elaboración de observaciones técnicas a los proyectos en evaluación. Sin embargo, reconoció que **la falta de recursos y formación especializada sigue siendo una barrera importante** para la defensa de los derechos comunitarios.

Marcelo concluyó su intervención haciendo un llamado a fortalecer la organización comunitaria y buscar estrategias de incidencia política que permitan visibilizar la situación de las comunidades costeras ante las autoridades. Insistió en la necesidad de una **transición energética verdaderamente justa**, que no solo considere la reducción de emisiones, sino que garantice la **protección de los ecosistemas marinos y el bienestar de las comunidades pesqueras tradicionales**.

Julio Ramos, representante de la **Agrupación Changos Recolectores Pescadores Buzos Algueros Mariscadores Camanchangos de Caleta Cobija**, inició su intervención compartiendo una visión profundamente emotiva y arraigada en la cosmovisión changa sobre la relación espiritual y cultural que su pueblo mantiene con el mar. Destacó que el mar no solo es su fuente de sustento, sino que representa un elemento esencial de su identidad y cosmovisión ancestral.

Describió con gran preocupación los **impactos devastadores** que la expansión de los megaproyectos industriales, como las plantas desaladoras y los proyectos de hidrógeno verde, están generando en la costa, poniendo en riesgo **los recursos marinos y su forma de vida tradicional**. Ramos expresó su temor de que, al igual que otras comunidades en el pasado, el pueblo Chango sea desplazado y vea diezmados sus recursos por la contaminación y la sobreexplotación.

En su testimonio, hizo un paralelo entre lo que está ocurriendo con su comunidad y **otros episodios históricos de desplazamiento y exterminio**, como la eliminación de los búfalos en América del Norte para afectar a los pueblos indígenas. Explicó que siente un profundo terror al ver cómo las políticas de desarrollo están **aniquilando lentamente los recursos pesqueros**, sin ninguna consideración por las comunidades que dependen de ellos.



Ramos criticó la falta de **consultas reales y vinculantes** por parte del Estado y las empresas, mencionando que **nunca se les ha preguntado** cómo estos proyectos afectarán sus vidas ni se les ha considerado como actores clave en la toma de decisiones. Explicó que su comunidad ha vivido **décadas de discriminación y exclusión**, primero por parte de las autoridades, que en el pasado no los reconocían como pueblo originario, y ahora por sus propios pares, que han sido divididos por las empresas mediante la oferta de empleos y compensaciones económicas.

Denunció que las empresas están generando conflictos internos en las comunidades pesqueras, utilizando tácticas de “**divide y vencerás**”, donde algunos pescadores aceptan acuerdos con las compañías mientras otros intentan resistir, lo que ha debilitado la cohesión social del pueblo Chango. En este sentido, enfatizó que la falta de información clara y accesible sobre los proyectos ha dificultado su capacidad de organización y resistencia.

Además, destacó la precaria situación en la que viven las comunidades costeras, sin **acceso a agua potable, electricidad ni alcantarillado**, mientras las empresas prometen un supuesto desarrollo y progreso. Ramos lamentó la paradoja de que mientras el país promueve políticas de sostenibilidad y energía verde, su comunidad sigue sobreviviendo en condiciones de extrema precariedad.

En su intervención, también compartió experiencias personales de persecución y amenazas por su rol como dirigente comunitario. Relató episodios de intimidación que ha enfrentado por oponerse a los megaproyectos en su territorio, destacando que la lucha por la defensa del mar y de su cultura ancestral es una **lucha peligrosa, pero necesaria** para garantizar la supervivencia de su pueblo.

Julio concluyó con un llamado a la **unidad y resistencia**, señalando que, a pesar de la adversidad, las comunidades deben articularse y fortalecer sus lazos de colaboración con organizaciones ambientales y académicas para enfrentar las amenazas que enfrentan. Hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para **reconocer los derechos del pueblo Chango** y garantizar su participación activa en los procesos de toma de decisiones que afectan sus territorios.



Conclusiones y Reflexiones Colectivas

Durante el panel, la audiencia tuvo la oportunidad de expresar sus inquietudes y reflexiones en torno a los desafíos de la transición energética en sus territorios. Las intervenciones resaltaron problemáticas concretas vinculadas a la contaminación, la falta de participación comunitaria en los procesos de evaluación ambiental y la desconfianza en las soluciones tecnológicas promovidas por el Estado y las empresas. Los panelistas, desde sus diversas experiencias territoriales, respondieron a estas inquietudes aportando perspectivas críticas y propuestas de acción.

Andrea Vázquez Alfaro, de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra, destacó la importancia de visibilizar el despojo territorial del pueblo Lickanantay en el Alto Loa, haciendo un paralelo con la situación de los pueblos costeros frente a la expansión industrial. Planteó la necesidad de articular esfuerzos entre comunidades para enfrentar la instalación de desaladoras y cuestionó la efectividad del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sugiriendo interpelar a la institución por su falta de independencia. Además, consultó sobre la efectividad del Plan de Descontaminación de Quintero-Puchuncaví (PPDA). **Katta Alonso**, en respuesta, explicó que dicho plan no ha significado mejoras concretas para la comunidad, siendo utilizado como un instrumento de pacificación social más que de solución efectiva, señalando además que las decisiones siguen favoreciendo a la industria en detrimento de las comunidades.

Raúl Riquelme, representante del pueblo chango, compartió su preocupación por el impacto de la contaminación industrial en la Bahía de Mejillones, resaltando la ausencia de evaluaciones sobre los efectos en el ecosistema marino profundo. Subrayó que la falta de acceso a información técnica impide que las comunidades pesqueras participen efectivamente en la toma de decisiones. **Julio Ramos**, desde su experiencia, afirmó que la situación de su comunidad refleja un despojo silencioso y constante, reiterando la necesidad de apoyo técnico y legal para fortalecer su defensa territorial y asegurar la protección de sus recursos pesqueros.

Alan Pérez, administrador público y activista, cuestionó la efectividad de los Planes de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) y pidió la opinión de los panelistas sobre el proyecto inmobiliario Maratué en Quirilluca. **Katta Alonso** respondió que estos planes han resultado ineficaces y que el proyecto inmobiliario representa una amenaza directa al ecosistema local, señalando la ausencia de una planificación territorial efectiva que priorice la conservación del entorno sobre los intereses empresariales.

Cristina Dorador, investigadora de la Universidad de Antofagasta y ex-Constituyente junto **Martín Arias**, académico de la Universidad Católica del Norte, reflexionaron sobre el valor histórico del proceso constituyente y el impacto del estallido social en la lucha socioambiental preguntándose cómo este proceso pudo haber influido en la articulación de las comunidades. **Robinson Galleguillos** expresó que, aunque el estallido permitió visibilizar algunas demandas, las soluciones estructurales aún no llegan a las comunidades indígenas, destacando la importancia de seguir trabajando desde la autonomía y la resistencia territorial.

Finalmente, **Carlos Soto**, ingeniero del Centro de Desarrollo Energético de la UCN, subrayó la necesidad de fortalecer la relación entre la academia y las comunidades, destacando el potencial de colaboración para desarrollar soluciones sostenibles. **Robinson Galleguillos**, en su respuesta, compartió la experiencia de su comunidad en la construcción de alianzas con la academia, enfatizando que la investigación científica ha sido clave para frenar proyectos perjudiciales y defender su territorio de manera más efectiva.

Las intervenciones y respuestas reflejaron la urgencia de fortalecer la articulación entre las comunidades afectadas, la academia y la sociedad civil, con el objetivo de construir alternativas reales y participativas frente a los impactos de la transición energética en el norte de Chile.

Comentarios finales

El seminario “Desafíos de la Transición Justa en el Norte de Chile” concluyó con una reflexión sobre la urgencia de replantear el modelo de transición energética en el país con una mirada puesta en los territorios del norte. Las intervenciones y discusiones desarrolladas a lo largo de la jornada evidenciaron la necesidad de situar la justicia socioambiental y climática como eje central en cualquier proceso de descarbonización o reconversión productiva a nivel local. Se destacó que la implementación de megaproyectos minero-energéticos, sin la participación efectiva y vinculante de las comunidades, perpetúa las lógicas extractivistas y profundiza las desigualdades históricas que afectan a la región.

Las exposiciones también resaltaron el compromiso y la organización de las comunidades costeras y altoandinas en la defensa de sus territorios, quienes exigen que los proyectos energéticos, mineros y de actividades como desaladoras sean evaluados respetando los ecosistemas e incorporando los saberes locales y ancestrales. Las experiencias territoriales compartidas, provenientes de Quintero-Puchuncaví, la Bahía de Mejillones y el Alto Loa, mostraron tanto el abandono de deberes del estado como la agencia de las comunidades organizadas que defienden sus modos de vida y territorios resistiendo el sacrificio.

Desde Fundación Tantí valoramos especialmente la disposición de las y los asistentes a compartir sus experiencias, inquietudes y propuestas, enriqueciendo el debate y perfilando posibles caminos de articulación entre territorios, la academia y la sociedad civil así como valioso potencial de incidencia en los gobiernos locales y regionales. Enfatizamos la importancia de continuar construyendo redes de cooperación y solidaridad que permitan fortalecer el trabajo colectivo para una transición socioecológica que realmente responda a las necesidades de los territorios.

Finalmente, llamamos a las comunidades, movimientos socioambientales e investigadores participantes del seminario a continuar compartiendo experiencias y a multiplicar estos espacios de discusión, con el objetivo de fortalecer sus procesos de cuidado del territorio avanzar hacia nuevos modelos de desarrollo que pongan en el centro el bienestar de los pueblos, la sostenibilidad ambiental y la protección de la naturaleza.





FUNDACIÓN TANTÍ

